

COALICIÓN POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

presenta:

AGENDA PRIORITARIA:

SEGURIDAD Y JUSTICIA CRIMINAL

Agosto 2019



MEJOREMOS
GUATE



#SeguridadGT

www.cien.org.gt

 [cien.guatemala](https://www.facebook.com/cien.guatemala)

 [@CIENgt](https://twitter.com/CIENgt)



AGENDA PRIORITARIA: **SEGURIDAD Y JUSTICIA CRIMINAL 2020-2024**

En este documento se hace una revisión de los avances de los indicadores de seguridad ciudadana hasta julio de 2019. Se presentan los retos y recomendaciones para el Ministerio de Gobernación, enfocado en: ***la Policía Nacional Civil, la Investigación Criminal y el Sistema Penitenciario.***

Adicionalmente se hacen recomendaciones para mejorar la eficiencia de las instituciones que forman parte del sistema de justicia criminal.

SITUACIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

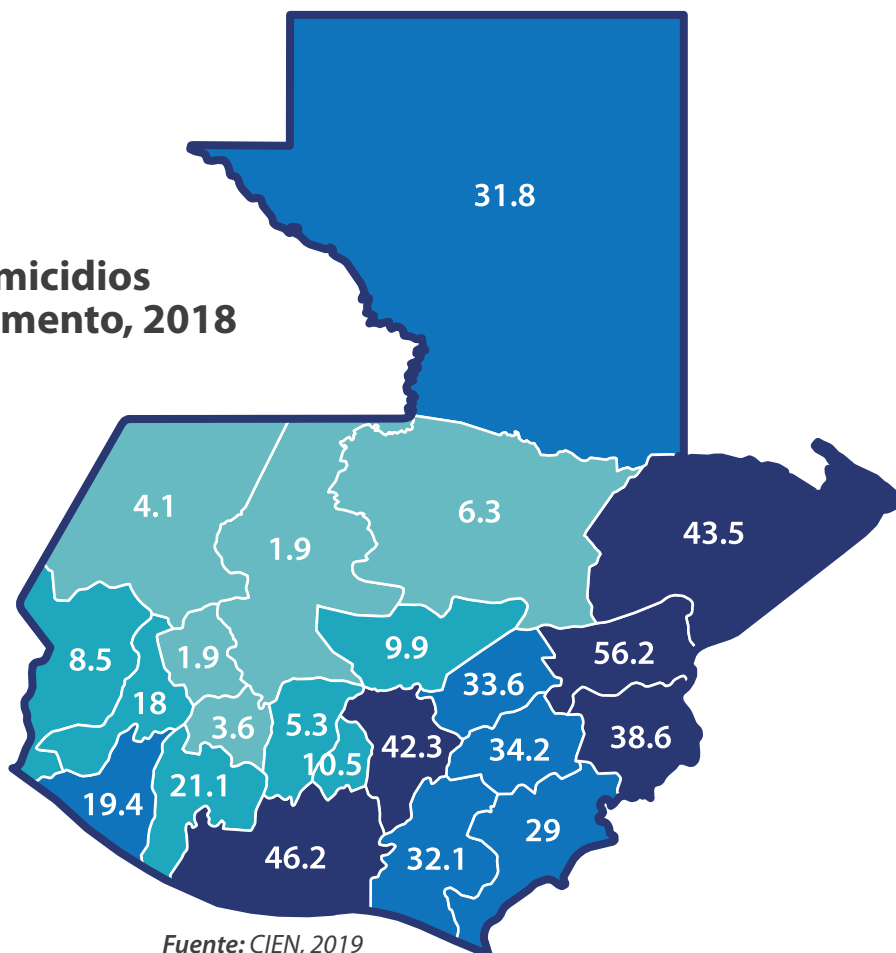
En el año 2009, Guatemala registró la cantidad y la tasa más alta de homicidios. Hubo 6,498 homicidios, lo cual representó una tasa de **46.4 homicidios por cada 100 mil habitantes**. En 2018 hubo **3,871 homicidios y la tasa fue 22.4**. En julio de 2019 la tasa se encontraba en **21.7 por cada 100 mil habitantes**, la cual se ha mantenido en el mismo nivel en los primeros siete meses del año, frenando la tendencia hacia la baja que se observó en años anteriores.

Las tasas más bajas de homicidios por departamento en 2018 se registraron en el Altiplano. Los departamentos con las tasas más altas son los mismos que en años anteriores: Zacapa, Escuintla, Izabal, Guatemala y Chiquimula.

A nivel municipal, **18 municipios registraron el 51% de todos los homicidios**, diez de los cuales son del departamento de Guatemala y otros cinco son cabeceras departamentales.

La cantidad de homicidios es el indicador más utilizado para monitorear los avances o retrocesos en materia de seguridad ciudadana. Para complementar este indicador, cada mes el CIEN ha elaborado el Índice de Denuncias de Delitos -IDD-, el cual incluye, además de los homicidios, ocho tipos de denuncias de delitos, agrupados en delitos contra las personas y delitos contra la propiedad.

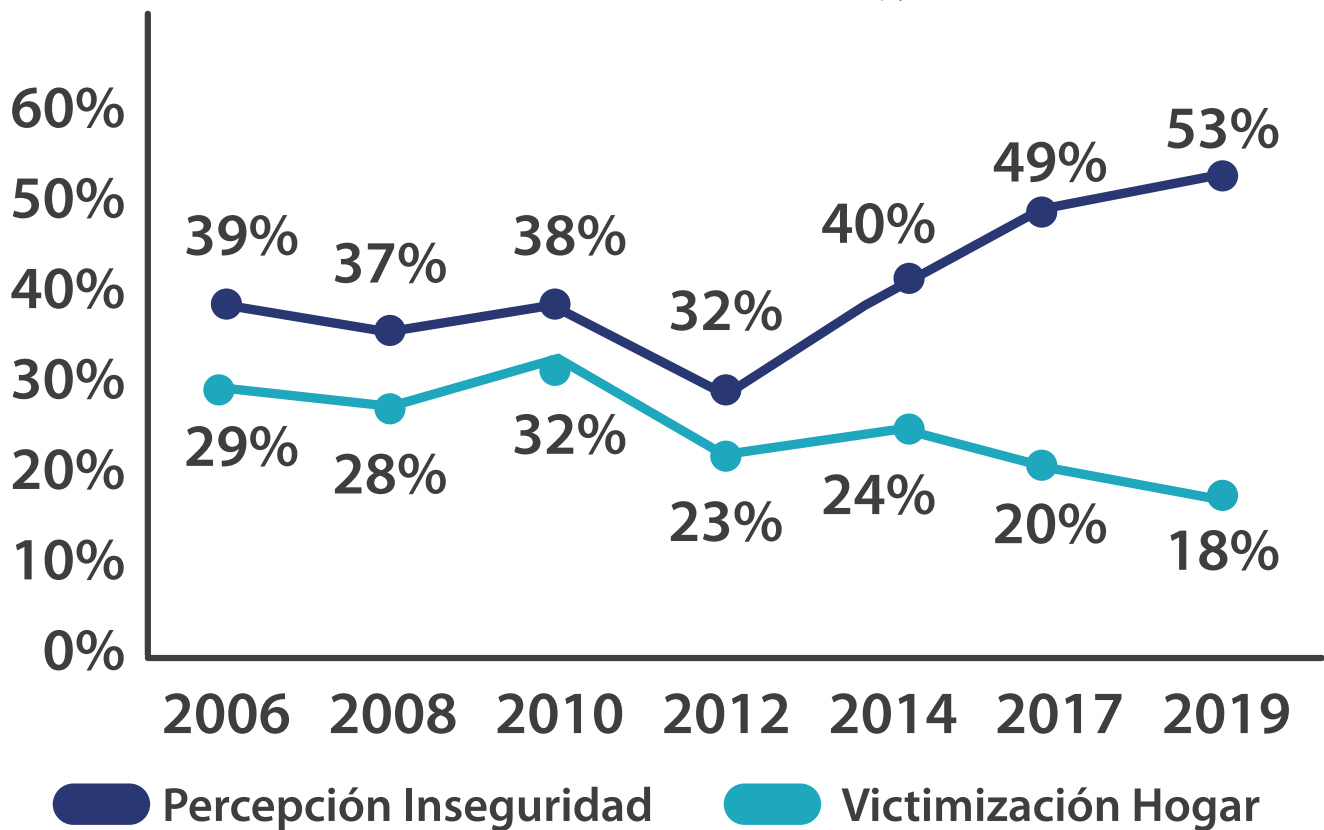
Tasas de Homicidios por Departamento, 2018



Fuente: CIEN, 2019
con base en datos de PNC y INE.

Victimización y Percepción sobre Inseguridad 2006-2019

Fuente: CIEN, 2019 con base en datos de CID-Gallup y LAPOP.



Al medir las tasas interanuales por cada 100 mil habitantes de estos nueve indicadores, el IDD presenta un resumen general de la situación de seguridad ciudadana.

Durante 2018 el IDD se redujo en 10 de los 12 meses. Asimismo, seis de los nueve delitos monitoreados se redujeron. Los que incrementaron fueron las denuncias por extorsión, secuestro y robo de furgones con mercadería. En el año 2019, el IDD se redujo en los primeros siete meses, aunque de los delitos contra el patrimonio, la extorsión muestra una tendencia al alza.

La tendencia hacia la baja de las denuncias de delitos medida a través del IDD se confirma con la reducción de la victimización reportada en encuestas realizadas por CID-Gallup. En cambio, la percepción de inseguridad ha empeorado en los últimos años según datos reportados en las encuestas realizadas por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina -LAPOP-, de la Universidad de Vanderbilt. En resumen, a pesar que la victimización ha bajado, la percepción sobre inseguridad ha aumentado.

MARCO CONCEPTUAL DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

El marco conceptual que CIEN ha utilizado en el abordaje de la seguridad ciudadana inicia desde la prevención hasta la coerción, pasando por la resolución pacífica de los conflictos, la contención del crimen, la judicialización y la penalización y resocialización.

La seguridad ciudadana está vinculada al sistema de justicia criminal. Es un sistema que inicia previniendo la ocurrencia de delitos y termina por castigar los que se han cometido, a la vez que previene la reincidencia por medio de la resocialización.

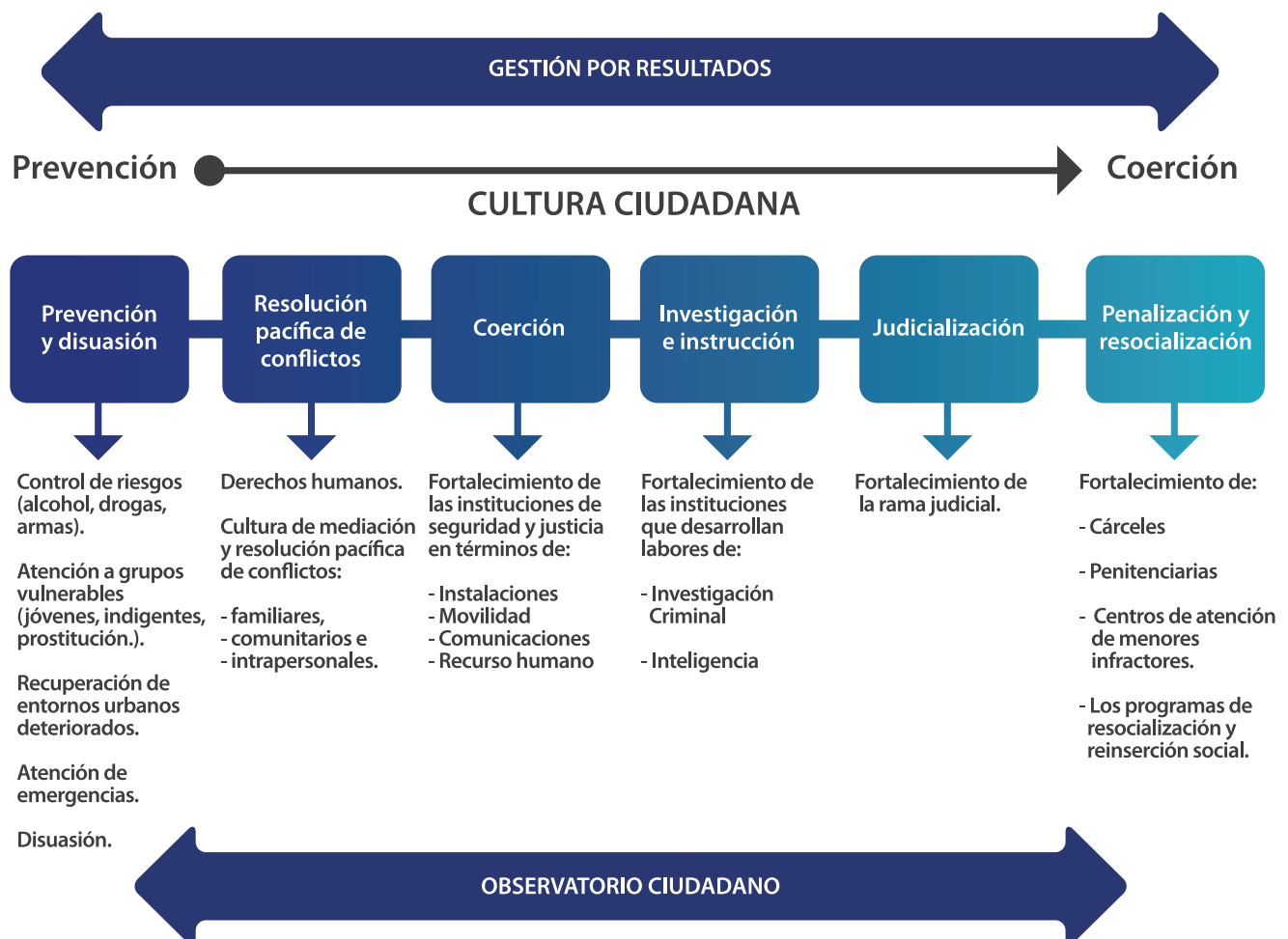
Marco Conceptual: Modelo de Convivencia y Seguridad Ciudadana

Fuente: CIEN, 2011.

Los ejes transversales del marco conceptual son:

1) La gestión por Resultados, para que las intervenciones de política pública sean eficaces y eficientes, y 2) el involucramiento de la ciudadanía, para la provisión de insumos para la toma de decisiones en la implementación de políticas públicas.

En las siguientes páginas se abordan los desafíos que se enfrentan en la Policía Nacional Civil, el Sistema Nacional de Inteligencia, la Investigación Criminal, el Sistema Penitenciario y en la eficiencia del sistema de seguridad y justicia. También se presentan recomendaciones para el periodo 2020-2024.



POLICÍA NACIONAL CIVIL

La Policía Nacional Civil -PNC-, juega un papel preponderante dentro de la prevención y contención del delito. A julio de 2019 la institución cuenta con **41,800 agentes**, lo cual equivale a una tasa de **23.6 por cada 10,000 habitantes**, luego de registrar 14 en el año 2008. Ahora bien, ¿Cuál es la cifra óptima de agentes a alcanzar? La respuesta es muy compleja, especialmente cuando no se mide la efectividad y preparación de los agentes, los recursos tecnológicos, movilidad, equipamiento, incidencia, licencias y descansos, entre otros.

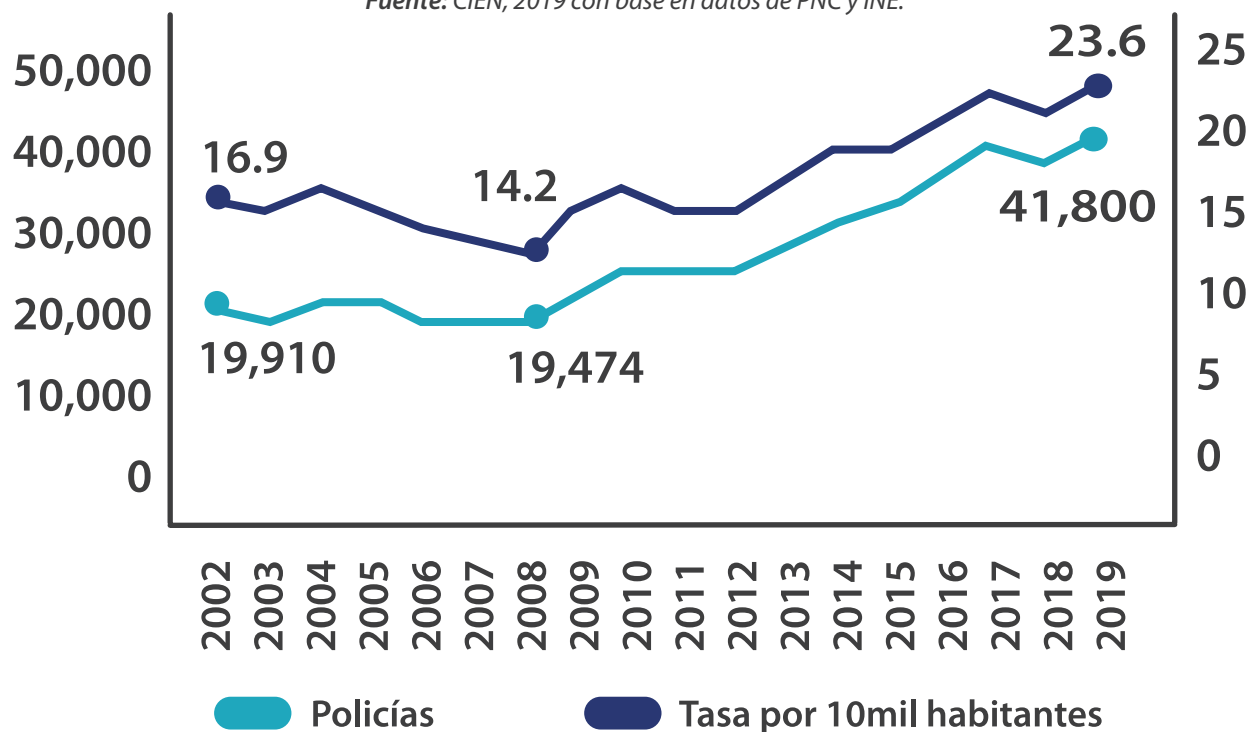
El ingreso a la PNC, es por medio de su Academia. Centro docente que selecciona y forma a sus aspirantes. La admisión, se hace mediante convocatorias públicas de libre oposición, superación de pruebas y calificación. Proceso que muchas veces se ve rebasado en su capacidad instalada, lo que no ha permitido alcanzar niveles aceptables de confiabilidad y ponderación de la vocación de sus candidatos.

En el año 2019 no hay ningún proceso de formación de nuevos agentes, mientras que la contratación de los que fueron formados en el año 2018 se retrasó por más de tres meses. Adicionalmente es baja la calidad educativa, a pesar de pasar de seis meses a 11 de formación, no alcanzan niveles mínimos, especialmente por la deficiente formación escolar de los aspirantes.

La constante formación policial abarca especialmente la capacitación para el ascenso durante la carrera. De esa cuenta operan la Escuela de Formación de Oficiales de Policía –ESFOP-, la Escuela de Estudios Superiores de Policía –ESPOL-, y la Escuela de Especialidades de Policía –EPOL-. Desafortunadamente durante el año 2018, alumnos ya formados no fueron tomados en cuenta para los ascensos y estas escuelas no han formado nuevos cuadros, según informes de la PNC (la última promoción -la IV- de oficiales III de policía se graduó en 2017).

Agentes y Tasa de Policías

Fuente: CIEN, 2019 con base en datos de PNC y INE.



El despliegue de la plantilla de PNC es a través de estructuras funcionales, operativas y territoriales. Existen 27 comisarías distribuidas en siete distritos. **El 61% de agentes de PNC**, están asignados a las comisarías, y el resto en las Direcciones y Subdirecciones. No se encuentra una correlación exacta para determinar los criterios de distribución territorial, pero hay algún grado de coincidencia con el porcentaje de homicidios.

En cuanto la infraestructura policial, **de las 896 sedes únicamente el 15.4%** son en propiedad, el resto son en arrendamiento, usufructo, prestadas, propiedad municipal, de la Juntas Locales, etcétera. Ello no solo refleja una seria carencia e inestabilidad, sino conforme las leyes presupuestarias no hay posibilidad de invertir en inmuebles que no estén registrados a favor del Estado.

SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA

La acertada toma de decisiones es una condición necesaria para la buena gestión pública y el buen gobierno, los tomadores de decisiones en el Estado requieren de conocimiento oportuno y veraz, para lo cual es necesario procesar y analizar información, lo cual es denominado actividades de inteligencia.

En la literatura especializada, la inteligencia se define como el “producto obtenido tras aplicar a la información técnicas de análisis, de forma que resulte útil a la hora de tomar decisiones con el menor nivel de incertidumbre posible, siguiendo el ciclo de inteligencia” (1). Entendiendo este último como “el proceso periódico de la secuencia de actividades jerarquizadas, planificadas y programadas, que se realizan para satisfacer de manera oportuna las necesidades de información para la toma de decisiones.” (2)

En base a una percepción generalizada en los expertos, actualmente los entes de inteligencia no están cumpliendo con sus funciones adecuadamente; desde una perspectiva estratégica, la Secretaría de Inteligencia de Estado no proporciona a su usuario específico, el Presidente de la República, los productos que le permitan tener un horizonte de mediano y largo plazo al respecto de las diferentes áreas de importancia para el país.

La Dirección General de Inteligencia Civil -DIGICI- del Ministerio de Gobernación, después de la investigación iniciada por supuestos casos ilegales de espionaje, ha perdido la importancia que tenía, y se sabe que no está respondiendo

en la formulación de productos de inteligencia criminal que le corresponden, aunque han dado un apoyo al Ministerio Público -MP-, situación que ha derivado en críticas fuertes ya que la Ley de DIGICI prohíbe expresamente la realización de tareas de investigación criminal.

En la legislación nacional el Sistema Nacional de Inteligencia, es un modelo sistémico, basado en el criterio de funcionalidad autónomo entre las instituciones, pero con un nivel alto de coordinación interinstitucional que debe garantizar la visión integral en los productos de inteligencia, referido a los diferentes ámbitos de actuación de la misma, como se muestra en el esquema.

Ámbitos de Inteligencia

Fuente: CIEN, 2019.



(1) Antonio Díaz Fernández. “Diccionario LID Inteligencia y Seguridad”. Madrid, LID Editorial Empresarial y Ministerio de la Presidencia de España, 2013, pág. 162. / (2) *Ibíd.*, pág. 64.

INVESTIGACIÓN CRIMINAL

La investigación criminal se define como el esfuerzo para el establecer la verdad de los hechos delictivos y la identificación de la responsabilidad sobre ellos, identifica las relaciones causales del fenómeno delictivo para determinar evidencia que lo explique en su autoría y sus condiciones de posibilidad. Es la base de todo éxito en la persecución penal y esencial para reducir de los niveles de impunidad.

El diseño institucional actual del sistema de investigación criminal esta constituido por:

1. El Ministerio Público -MP- que a través de sus fiscalías coordina la investigación criminal y realiza las tareas de la persecución penal, con el apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas -DICRI-, que realiza tareas de análisis y estudio de pruebas.
2. La División Especializada en Investigación Criminal -DEIC- de la Subdirección General de Investigación de la PNC que tiene a su cargo las tareas operativas de la investigación criminal, que puede actuar de oficio o bajo indicaciones del MP.
3. La Dirección General de Investigación Criminal -DIGICRI-, del Ministerio de Gobernación -MINGOB-, que de acuerdo a su ley es “un órgano del Estado de carácter civil, especializado en investigación criminal”.
4. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala -INACIF-, que través de dictámenes técnicos científicos dotan a la función jurisdiccional, con medios de prueba válidos y fehacientes en los procesos judiciales. Presta sus servicios a requerimiento de jueces y fiscales, no actúa de oficio.

En la situación actual, según datos del Sistema Integrado de Justicia -SIJ-, elaborado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, los casos ingresados al sistema de justicia criminal fueron **428,107**. En comparación a años anteriores aumentó el número de casos remitidos de **223,042** a **330,395**. Desde la perspectiva de la impunidad para el periodo 2008-2016 el total de impunidad en todos los delitos fue del **92.86%**, con una tendencia a la baja, siendo **96.40%** la anual en 2008 y del **90.87%** en 2016, con una reducción del **5.53%**, lo que significa una tendencia a la baja de un **0.7% anual** en ese periodo.

En términos de eficiencia, el análisis del flujograma de la Justicia Criminal realizado por el CIEN para el 2018, mostró que de cien casos que entraron al sistema de justicia, se dio salida a 33, registrándose un nivel de eficiencia global del sistema para el 2018 de **33.2%**. El MP como ente rector de la investigación criminal tuvo una eficiencia de **37.7% en ese año**.

Estos datos muestran que aún no se ha alcanzado un nivel elevado de eficiencia, y tampoco se ha logrado reducir considerablemente la impunidad. Si bien, los datos presentados al inicio en este documento muestran que el contexto delictivo ha disminuido, la fluidez de la investigación criminal en su impacto en la justicia criminal aún muestra desafíos considerables. Esto se puede notar en la reducción del personal operativo asignado a tareas de investigación criminal en la DEIC, el cual pasó **de 3,918 a inicios de 2018 a 3,696 hacia finales de ese mismo año**. Durante todo el año se trasladó a **222 investigadores a comisarías**.

SISTEMA PENITENCIARIO

Al abordar los temas de Seguridad y Justicia, el Sistema Penitenciario usualmente es la institución a la cual menos atención se presta, sin embargo, debe cumplir con una función importante como lo es el resguardo seguro y la rehabilitación y reinserción de las personas.

En Guatemala, entre 2008 y 2018, **la población privada de libertad aumentó de 8,400 a 24,400 personas, equivalente a un crecimiento de 190%**. Para junio de 2019, la cantidad de privados de libertad **ascendió a 25,040 mientras que la capacidad total de las cárceles es de 6,812 espacios**, con lo que se observa una tasa de **ocupación de 368%**.

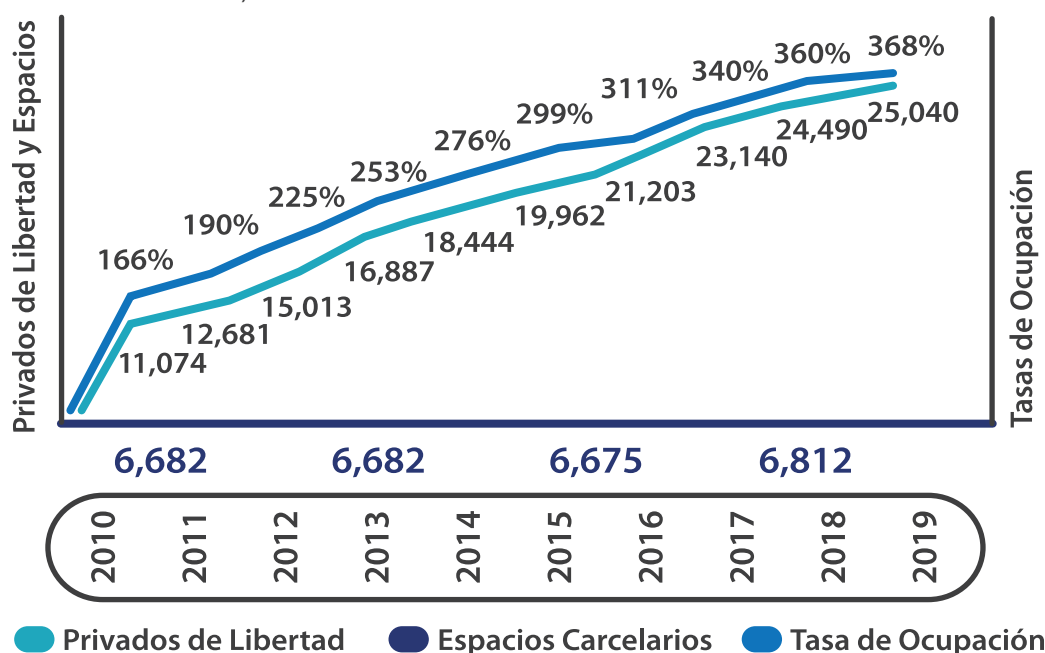
La tasa de prisionalización actual es de 142 reclusos por cada 100 mil habitantes, sin embargo, a pesar del aumento, sigue siendo la más baja de todo Latinoamérica. (3)

Resalta que tanto la población en prisión preventiva (**46%**) como la población de mujeres (**11%**) están encima de sus respectivos promedios latinoamericanos, al cual se suma la problemática de los pandilleros recluidos (**6% del total de privados de libertad son pandilleros**).

El aumento de privados de libertad ha empeorado las condiciones en las cárceles por la escasez de espacio y servicios, así como las malas condiciones de vida. El hacinamiento ha generado un descontrol en los establecimientos carcelarios, porque la institución opera con un déficit de personal e instalaciones sobrecargadas. Durante más de una década no se ha invertido en suficientes espacios carcelarios para ampliar la infraestructura.

Privados de Libertad y Espacios Carcelarios

Fuente: CIEN, 2019 con datos de la Dirección General del Sistema Penitenciario

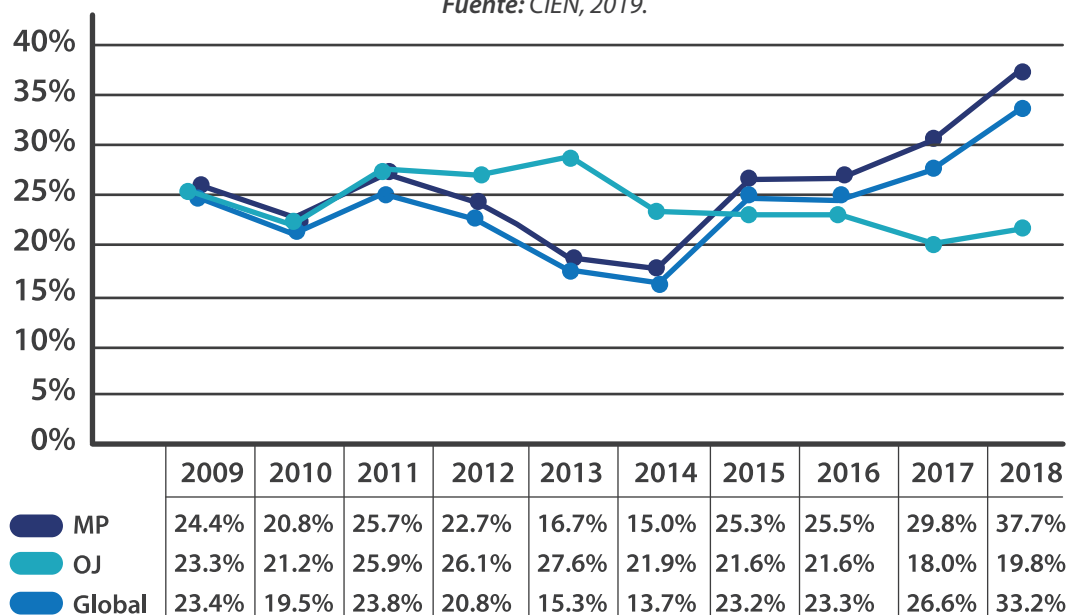


(3) Este dato llama mucho la atención, especialmente por los elevados niveles de delincuencia que hay en el país con una tasa de 22.4 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2018, Guatemala aún se ubica entre los doce países de mayor violencia homicida en el mundo, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y de InSight Crime.

ESTRATEGIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL

Eficiencia del Sistema de Justicia

Fuente: CIEN, 2019.



El flujograma de la justicia criminal es una herramienta que permite medir la eficiencia del sistema de seguridad y justicia y de las instituciones que lo integran. A través de la eficiencia global se cuantifica el desempeño del sistema en su conjunto; el indicador establece una relación entre los casos que han salido de forma definitiva del sistema en un año determinado, expresados como una razón del total de casos que ingresaron en el año analizado más aquellos que en años anteriores no hayan sido resueltos. La eficiencia del sistema de justicia criminal en Guatemala fue **33.2%** en 2018. Eso significa que **de cada 100 casos que se encontraban en el sistema, se le dio salida a 33.**

La eficiencia global ha experimentado mejoras constantes desde el año 2014, cuando se ubicaba en **13.7%**. La misma se encuentra altamente ligada al desempeño institucional del MP y del Organismo Judicial -OJ-, ya que son las instituciones que tienen la capacidad de dar salida a los casos que ingresan al sistema. Desde 2014 se observa un comportamiento opuesto en las eficiencias de estas instituciones.

Por un lado, el MP registra un comportamiento al alza, que pasó de una eficiencia de **15%** en 2014 a **37.7%** en 2018. Por otro lado, el OJ ha experimentado un comportamiento hacia la baja, pasando de una eficiencia de **21.9%** en 2014 a **19.8%** en 2018.

Dentro de la lógica del Flujograma, el desempeño del resto de las instituciones (PNC, IDPP e INACIF) contribuye a que tanto el MP como el OJ atiendan los casos con mayor celeridad, garantizando la calidad con la que se realiza el trabajo.

Para comprender el comportamiento institucional, es necesario vincular la evolución de las eficiencias con la asignación de recursos financieros y con la planificación establecida por cada una. Luego de revisar las asignaciones presupuestarias para las instituciones del Flujograma y las prioridades individuales. Se evidencia la ausencia de una visión sistémica y de la definición de metas en común, en donde las instituciones operen de manera coordinada. Espacios como el que brinda la Instancia Coordinadora de Modernización del Sector Justicia, podrían aprovecharse para promover una mayor coordinación interinstitucional.

HACIA UNA POLÍTICA PARA CONTRARRESTAR LA NARCOACTIVIDAD

El narcotráfico es percibido como una de las amenazas a la estabilidad social, política, económica y seguridad del Estado, en virtud de la cantidad de recursos económicos que genera y que le permiten ocasionalmente hacerle frente, minando la estructura de la sociedad y del gobierno, al corromper a ambos. Por esto, es necesario hacerle frente como un problema de seguridad nacional y regional, para lo cual es necesaria la formulación de políticas y estrategias para contrarrestarlo, desde la producción, el trasiego y el consumo de drogas, hasta actividades relacionadas como es el lavado de activos y tráfico de armas.

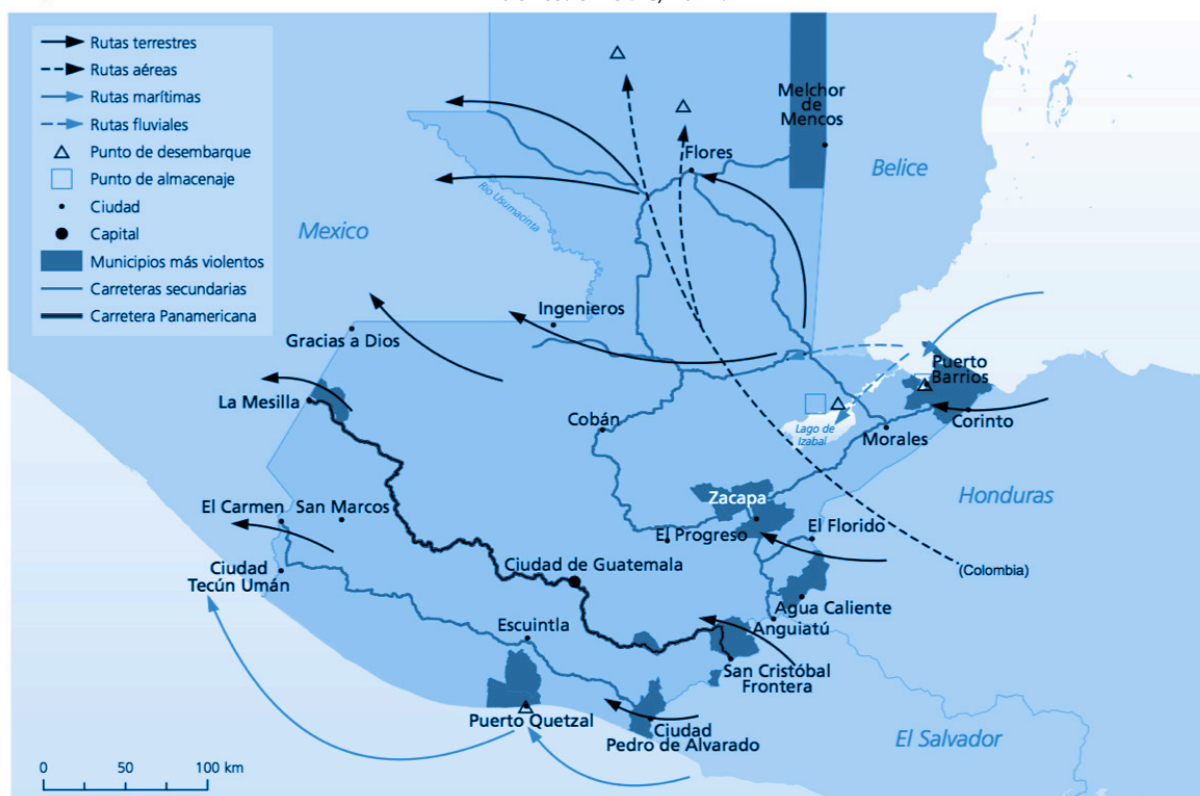
Especial atención requiere el tráfico de cocaína. Guatemala se encuentra en la ruta de esta droga que va desde los países productores en Suramérica, hacia uno de los mercados más grandes de consumo de drogas: Estados Unidos.

Según la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacentes -JIFE-, la producción de cocaína aumentó **50%** a nivel mundial en los últimos diez años. En Colombia, que en 2017 se calcula que producía el **70%** del total de la cocaína en el mundo, entre 2016 y 2017 la producción aumentó **31%**, **pasando de 1,053 a 1,379 toneladas** producidas. Las incautaciones de cocaína aumentaron **74%** a nivel mundial en los últimos diez años y en 13% entre 2016 y 2017. En Guatemala, las incautaciones de cocaína aumentaron **150% en los últimos diez años**, lo cual está asociado al incremento en la producción y el consumo, más que a razones de efectividad institucional.

En Guatemala existe legislación sobre drogas, un marco institucional para implementarla, y capacitación en áreas como el control de sustancias químicas, pero, hacen falta

Rutas de Tráfico de Cocaína

Fuente: UNODC, 2012.



procedimientos de evaluación sobre la eficacia de estas instituciones en la materia, así como en algunas no existe suficiente personal para ejecutar todas las responsabilidades. Indudablemente existe personal muy capacitado en sus funciones, pero la alta rotación de autoridades provoca cambios estructurales en la organización y no se institucionalizan los procesos, abriendo paso a la discrecionalidad.

Se han creado leyes para contrarrestar el fenómeno de la narcoactividad, pero frecuentemente falta la estructura institucional para su cumplimiento. Cuando hay institucionalidad, hace falta el recurso humano y financiero para llevarlas a cabo. Es por esto que debe fomentarse la institucionalización de los esfuerzos y coordinaciones para contrarrestar este fenómeno, incentivando la labor de inteligencia y la sistematización de datos como una base para el diseño de una política pública integral, con el objetivo de lograr mejores resultados.

PRIORIDADES EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA EL PERÍODO 2020-2024

1. FLUJOGRAMA DE LA JUSTICIA CRIMINAL:

- Definir metas de mejora por cada una de las instituciones del Flujoograma.
- Conformar equipos de trabajo y diseñar estrategia de trabajo para identificar y liberar cuellos de botella en cada una de las instituciones del sector.
- Promover que la formulación de los presupuestos anuales de las instituciones del Sistema se realice dentro de la Instancia Coordinadora de la Modernización del Sector Justicia, atando la asignación de recursos al cumplimiento de metas.
- Institucionalizar la actualización periódica del Flujoograma y la definición de metas de mejora (considerando las eficiencias del Flujoograma o la reducción de la ocurrencia de determinados delitos) al inicio de cada año.
- Elaborar periódicamente y publicar los resultados de encuestas de victimización.

2. POLICÍA NACIONAL CIVIL:

- Rediseñar un modelo de reclutamiento de nuevos agentes, basado en evaluaciones imparciales, objetivas y fundamentado en conformar en el mediano y largo plazo cuadros especializados y específicos para la carrera.
- Implementar un programa de evaluación y capacitación del personal docente de la Academia de la PNC.
- Regular, revisar y documentar todos los procesos de ascenso en la carrera policial.
- Fortalecer la Inspectoría General.
- Desarrollar un nuevo modelo de gestión en la PNC, que involucre planificación, asignación de recursos, compras y adquisiciones vinculadas a la disminución de índices delictivos.
- Articular un plan de mejora de la actividad de inteligencia policial.

3. SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA:

- Formular o actualizar la doctrina de Inteligencia de Estado en el plano estratégico, de combate a la criminalidad y en materia militar.
- Crear los mecanismos e instrumentos para la facilitación oportuna de productos de inteligencia a los tomadores de decisiones, en el marco de la prevención de las amenazas y riesgos a la seguridad y defensa de la nación.
- Reglamentar el funcionamiento del sistema nacional de inteligencia, que establezca las funciones de coordinación, los mecanismos de intercambio de información, procedimientos para la elaboración de la agenda de riesgos y amenazas a la seguridad y defensa de la nación y formatos homologados para los documentos de inteligencia de acuerdo a los distintos niveles de difusión.
- Crear la carrera del servidor público en materia de inteligencia, que permita la permanencia de cuadros técnicos en inteligencia estratégica, criminal y militar.
- Poner en marcha un programa de formación y actualización permanente en materia de inteligencia con criterios homologados de inteligencia de Estado, y en niveles de especialización de inteligencia estratégica, criminal y militar.

4. INVESTIGACIÓN CRIMINAL:

- Revisar y de ser necesario reformular los aspectos sobre la investigación criminal contenidos en la Política Criminal Democrática del Estado, abordando en particular la articulación de los roles de PNC y DIGICRI.
- Crear una mesa técnica de coordinación interinstitucional que genere instrucciones integrales para las entidades que hacen investigación criminal.
- Desarrollar herramientas para la recopilación de la información estadística, que uniforme los mecanismos de obtención de datos y facilite el desarrollo de análisis estratégico para el abordaje de los hechos de criminalidad priorizados.
- Profesionalizar a los actores a cargo de la investigación criminal de las entidades competentes para tener cuerpos investigativos efectivos y especializados.

5. SISTEMA PENITENCIARIO:

- Ampliar y modernizar la infraestructura existente con base en una planificación a mediano y largo plazo, con el fin de deshacinar las cárceles. Priorizar los centros de cumplimiento de condena.
- Fortalecer el uso de las medidas alternas al encarcelamiento con base en la Ley del Control Telemático (2016).
- Retomar el proyecto del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para lograr cambios visibles en la administración de los centros carcelarios, rehabilitación y atención a los privados de libertad.
- Diseñar e implementar la carrera penitenciaria, que permita ascensos jerárquicos basados en mérito.

6. POLÍTICA PARA CONTRARRESTAR LA NARCOACTIVIDAD:

- Erradicar el cultivo de drogas ilícitas, estableciendo programas de desarrollo alternativo en estas áreas y mejorar las condiciones de vida de los pobladores involucrando a los gobiernos locales y líderes de las comunidades.
- Adquirir equipo (drones) y naves aéreas para fortalecer acciones de control y erradicación de cultivos.
- Intensificar las acciones policiales y militares para reducir el tráfico ilícito de drogas y desvío ilícito de precursores químicos.
- Mejorar las capacidades aéreas, navales y terrestres para el control fronterizo. Reforzar los controles aduaneros, utilizando tecnología moderna (Scanner, Rayos X), aumentando al personal y apoyo logístico.
- Mejorar el esfuerzo de salud pública que permita destinar recursos a la prevención, tratamiento y rehabilitación.
- Mejorar los sistemas para prevenir/detectar las operaciones de flujo monetario y compra de bienes con fines de lavado de activos.
- Implementar un sistema de depuración permanente de elementos en la Policía Nacional Civil y el Ejército que se detecten involucrados en narcoactividad.
- Perseguir la presencia del narcotráfico en actividades políticas.
- Reforzar esfuerzos para reducir el tráfico ilícito de armas.

La Coalición por la Seguridad Ciudadana es una iniciativa creada en 2014 como parte del proyecto Mejoramos Guatemala integrada por funcionarios, centros de investigación, sociedad civil y empresarios. Tiene como fin mejorar las condiciones de seguridad y justicia del país por medio de la coordinación de esfuerzos interinstitucionales, formulación de políticas públicas y seguimiento a los indicadores de eficiencia y criminalidad. El CIEN actúa como instancia técnica de la misma.



Coalición por la
Seguridad Ciudadana



FUNDESA
Fundación para el Desarrollo de Guatemala

#SeguridadGT

www.cien.org.gt



[cien.guatemala](https://www.facebook.com/cien.guatemala)



[@CIENgt](https://twitter.com/CIENgt)

2661-7578 / 2661-7579